



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0174/2017

FECHA: 30 de octubre de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0174/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito notificado el 7 de abril de 2017, el ahora reclamante planteó al amparo de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- una solicitud de acceso ante el Ayuntamiento de Serradilla -Cáceres- con relación a la siguiente información,

- Informe Técnico-Económico de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, número 242, de 17 de diciembre de 2014
- Alegaciones y/o recursos presentados por las empresas obligadas al pago del impuesto.
- Inventario realizado para solicitar el abono del impuesto
- Acceso a la vista completa del expediente concluso de referencia.

Transcurrido el plazo al que hace alusión el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber obtenido contestación a su previa solicitud de acceso a la información, el

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



interesado la considera desestimada y, en consecuencia, mediante escrito registrado en esta Institución el 2 de junio de 2017 interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

2. A través de un escrito de 6 de junio de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se trasladó el expediente de referencia a la Junta de Extremadura a fin de que, una vez remitido al Ayuntamiento de Serradilla, se formularan las alegaciones que se estimasen por convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en que fundamentar las posibles alegaciones que se hubiesen planteado.

En la fecha en la que se dicta la presente Resolución no se ha recibido en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegación alguna con relación al expediente de referencia.

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. Asimismo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 24.6 de la LTAIBG, en relación con el apartado 2 de su Disposición adicional cuarta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.
3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta Resolución, por lo que respecta al fondo del asunto planteado cabe recordar que, según se desprende de su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto *“ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”*.



A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como

*“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.*

A tenor de los preceptos mencionados cabe concluir afirmando que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley.

4. Partiendo de esta premisa, el objeto de la presente reclamación consiste en conocer el denominado “informe técnico-económico” que debe elaborarse cuando se trata de adoptar acuerdos de establecimiento de tasas por los ayuntamientos, según se desprende del artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a tenor del cual

*“Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.”*

Con relación a los “informes” como objeto del derecho de acceso a la información, en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas legalmente por las letras a) y e) del artículo 38.1 de la LTAIBG, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado el CRITERIO INTERPRETATIVO CI/006/2015, de 12 de noviembre, en el que se delimita el alcance de la noción de información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como causa de inadmisión de solicitudes de acceso a la información en el artículo 18.1.b) de la LTAIBG. A los efectos que ahora importan, cabe recordar aquí las siguientes consideraciones contempladas en dicho documento:

- *La redacción del artículo 18 de la Ley 19/2013, establece una serie de causas que permiten declarar la inadmisión de una solicitud de información que, al tener como consecuencia inmediata la finalización del procedimiento, habrán de operar, en todo caso, mediante resolución motivada.*



*Por tanto, será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicable al caso concreto.*

- *Este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, podrá ser declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias:*
  1. *Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad.*
  2. *Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final.*
  3. *Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud.*
  4. *Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento.*
  5. *Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final.*
- *Por último, debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para qué operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue la información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo”.*

Como puede apreciarse, el artículo 18.1 de la LTAIBG enumera una serie de causas de inadmisión de solicitudes de acceso a la información que, para su aplicación al caso concreto, han de ser invocadas y fundamentadas por la administración. En el caso que ahora nos ocupa esta circunstancia no ha sido alegada por la administración municipal. Además, hay que advertir que, según se desprende del mencionado artículo 25 del TRLRHL, el informe de referencia se trata de un informe preceptivo, motivo por el que no puede configurarse, en consecuencia, como información auxiliar o de apoyo, dado que es en función del mismo en virtud del cual el órgano competente de la administración municipal adopta su decisión, correspondiendo, en conclusión, estimar la reclamación planteada en este punto concreto.





5. Por otra parte, en cuanto a la solicitud relacionada con las alegaciones y/o recursos presentados por las empresas obligadas al pago del impuesto, cabe advertir que, según se desprende del tenor literal del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, nº 242, de 17 de diciembre de 2014, sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones, «[a] no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 24 de octubre de 2014 sobre imposición de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma». Esto es, la información solicitada no existe en el momento de plantearse la solicitud, puesto que, como acredita el propio ayuntamiento en el indicado anuncio público, no se ha presentado reclamación alguna al proyecto de ordenanza fiscal. Por ello, y teniendo en cuenta que del artículo 13 de la LTAIBG se deriva la circunstancia de que el objeto del derecho de acceso ha de existir en el momento de plantearse la solicitud, cabe concluir desestimando la reclamación en este punto concreto al no existir el objeto sobre el cual ejercitar el derecho.

Asimismo, y con relación a la solicitud formulada por el ahora reclamante de que se certificase por el ayuntamiento al inexistencia de la información cabe señalar que las solicitudes de acceso a la información, de acuerdo con el criterio mantenido en anteriores resoluciones por este Consejo, no amparan solicitudes de certificados, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. Este Consejo de Transparencia entiende, en definitiva, que el ciudadano dispone de vías para obtener compulsas o certificaciones expedidas por la Administración, entre las cuales no se encuentra la LTAIBG, de modo que siguiendo el criterio fijado en anteriores Resoluciones -R/0118/2016, de 22 de junio y RT/0112/2016, de 30 de septiembre-, procede desestimar la reclamación presentada

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

**PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE** la Reclamación presentada por [REDACTED] en los términos del Fundamento Jurídico 4 de esta Resolución por cuanto su objeto se trata de información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

**SEGUNDO: INSTAR** al Ayuntamiento de Serradilla -Cáceres- a que en el plazo de quince días proporcione a [REDACTED] la información solicitada



y no satisfecha, remitiendo, en igual plazo, a este Consejo copia de la información suministrada al reclamante que acredite el cumplimiento de esta Resolución

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
Fdo.- Esther Arizmendi Gutiérrez

